----- RESOLUCIÓN NÚMERO 86 (OCHENTA Y SEIS).--

----- Ciudad Victoria, Tamaulipas, 15 quince de marzo de 2018 dos mil dieciocho.- -----

----- Vistos para resolver los autos del Toca 93/2018 formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por la actora

*****

***** en contra de la sentencia del 19 diecinueve de diciembre de 2017 dos mil diecisiete dictada por el Juez de Primera Instancia Civil del Séptimo Distrito Judicial del Estado con residencia en Ciudad Mante, Tamaulipas, dentro del expediente 288/2017 relativo al Juicio Hipotecario promovido por el

*****

***** a través de su representante legal licenciada ***** en contra de *****

***** *****; y,- -----

-----R E S U L T A N D O-----

----- PRIMERO.- Mediante escrito presentado el 20 veinte de octubre de 2017 dos mil diecisiete compareció la licenciada ***** en su carácter de representante legal del ***** , ante el Juez de Primera Instancia Civil del Séptimo Distrito Judicial del Estado con residencia en Ciudad Mante,

Tamaulipas, a promover Juicio Hipotecario en contra de
 ***** de quien reclama las prestaciones que
 enseguida se transcriben:-

(SIC) "A).- El vencimiento anticipado del CONTRATO DE OTORGAMIENTO DE CRÉDITO CON CONSTITUCIÓN DE GARANTÍA HIPOTECARIA en atención a los hechos que narraré más adelante en el Capítulo respectivo, y la consecuente declaración judicial para que este Tribunal así se pronuncie y sentencie que ha procedido y ha lugar a dar por vencido anticipadamente dicho contrato.- B).- El pago del equivalente a 156.2832 veces el Salario Mínimo mensual vigente en el Distrito Federal, en lo sucesivo "VSMM", que a la fecha de la presentación de la presente demanda equivale a la cantidad de \$358,653.69 (trescientos cincuenta y ocho mil seiscientos cincuenta y tres pesos 69/100 moneda nacional) por concepto de capital o suerte principal.- C).- El pago de los intereses ordinarios generados y que se sigan generando hasta la total solución del presente juicio sobre saldos insolutos de acuerdo a lo establecido en la Clausula PRIMERA del CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE CON GARANTÍA HIPOTECARIA del contrato base de la acción, relacionada con las CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN DEL CRÉDITO", en su

CLAUSULA DÉCIMA, mismos que serán cuantificados en ejecución de sentencia; mas los intereses ordinarios que se sigan generando con motivo de que el demandado no ha restituido a mi representada la cantidad que adeuda del crédito, por lo que sigue teniendo dicha cantidad en su patrimonio, siendo que la naturaleza del interés ordinario es la renta que produce el capital; D.- El pago de intereses moratorios no cubiertos, mas los que se continúen generando hasta la total de liquidación del adeudo, cantidad que sera determinada en ejecución de sentencia para lo cual se tendrá como salario mínimo general vigente en la Ciudad de México el que haya determinado la Comisión Nacional de Salarios Mínimos en la época de la ejecución, como se pacto en LAS CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN ya indicadas con anterioridad, concretamente CLAUSULA DÉCIMA SEGUNDA, de la cual declaró el ahora demandado conocer y aceptar ajustarse a ella para efectos del contrato que nos ocupa, tal y como se aprecia en la escritura publica que aquí acompaño. E.- El pago de la Primas de Seguros. Gastos de Cobranza, así como los gastos que se encuentren vigentes en cuanto corresponda, en los términos del contrato base de mi acción relacionándolo con las condiciones generales de contratación ya citadas en sus CLAUSULAS DÉCIMA, SÉPTIMA, DÉCIMA OCTAVA, Y DÉCIMA NOVENA. F.- El pago de la cantidad

que en ejecución de sentencia y con el auxilio de peritos sea fijado por concepto de daños y perjuicios ocasionados a mi representada, derivados del incumplimiento del demandado, los cuales se integran de la siguiente forma: 1.- Por concepto de daños, una cantidad equivalente a una renta mensual, desde que mi representante le otorgo el crédito, es decir, el día 06 de junio del año 2008, hasta en tanto reciba el pago a su entera satisfacción por el uso del inmueble, lo cual sera calculado en ejecución de sentencia con el auxilio de peritos. 2.- Por concepto de perjuicios, los intereses legales que produzcan de rentas no pagadas por el demandado, señaladas en el inciso uno de este apartado. Ambos conceptos se calcularan en ejecución de sentencia con el auxilio de peritos en términos de lo dispuesto por el código de procedimientos civiles del Estado. **G.- El pago de las actualizaciones de todas y cada una de las prestaciones que pretendo hacer valer, derivadas del incremento al salario mínimo para el Distrito Federal que sea aprobado por la Comisión Nacional de Salarios Mínimos para el año en que sea ejecutable la sentencia que se dicte en el presente juicio, mismo que evidentemente irá aumentando anualmente y a lo cual se obligó el demandado ya que acepto las condiciones generales de contratación de ***** y este ajuste se encuentra pactado en su CLAUSULA DÉCIMA PRIMERA. H.- El pago**

de los gastos y costas que se originen por motivo de la tramitación del presente juicio, tal y como se pacto en las citadas CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN, en su CLAUSULA VIGÉSIMA. I.- En caso de no verificarse el pago de todas y cada de las prestaciones aquí reclamadas solicito la declaración de hacer efectiva la garantía hipotecaria materia del CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE CON GARANTÍA HIPOTECARIA, como lo estipula la CLAUSULA SEGUNDA del referido contrato para el caso de ser condenado y que no pague en el término de ley..-” (SIC).- -----

----- Fundándose en los hechos contenidos en el propio escrito de demanda los que pretendió acreditar con las pruebas que al efecto ofreció y anexó al mismo.- -----

----- ***** ***** ***** , no dio contestación a la demanda entablada en su contra por lo que fue declarada en rebeldía mediante acuerdo firme del 22 veintidós de noviembre del 2017 dos mil diecisiete.- -----

----- Se continuó con la substanciación del juicio en sus demás trámites legales, y el 19 diecinueve de diciembre de 2017 dos mil diecisiete el Juez del conocimiento dictó la sentencia definitiva correspondiente, la cual concluyó con los siguientes puntos resolutivos:- -----

(SIC) **“PRIMERO:** Se declara improcedente el JUICIO HIPOTECARIO promovido por la C. LICENCIADA ******, en su carácter de Apoderado Legal del ****** ****** (*****), en contra de la C. ******, conforme al razonamiento expuesto en el considerando cuarto de la presente sentencia.- **SEGUNDO:** En consecuencia, se absuelve a la parte demandada de las prestaciones reclamadas por la parte actora.- **TERCERO:-** No se hace especial condena al pago de los gastos y costas en ésta Instancia ninguno de los contendientes, por lo que cada uno deberá de sufragar las que hubiere erogado.- **NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES.-** Así lo resolvió y firma el CIUDADANO LICENCIADO JOSÉ RAMÓN URIEGAS MENDOZA...” (SIC).- --

----- SEGUNDO.- Notificadas las partes del fallo anterior e inconforme la parte actora

*****
 , a través de su apoderada general licenciada ****, interpuso en su contra recurso de apelación, el que fue admitido en efecto devolutivo por el Juez de Primera Instancia quien ordenó la remisión de los autos al Supremo Tribunal de Justicia donde por acuerdo plenario del 27 veintisiete de febrero

de 2018 dos mil dieciocho se turnaron a esta Sala Colegiada para su conocimiento y resolución.-

-----

-----C O N S I D E R A N D O-----

----- PRIMERO.- Esta Primera Sala Colegiada en Materias Civil y Familiar del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas es competente para conocer y decidir el presente recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 104, fracciones I y I-B y 116 fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 104 fracción I y 106 de la Constitución Política local, 20 fracción I, 26 y 27 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, en relación a los acuerdos del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia del 3 tres de junio de 2008 dos mil ocho y 31 treinta y uno de marzo del 2009 dos mil nueve, publicados en el Periódico Oficial de la Entidad del 5 cinco de junio del 2008 y 7 siete de abril del 2009 dos mil nueve.- -----

----- SEGUNDO.- La actora

*****

***** a través de su representante legal licenciada ***** , expresó en concepto

de agravios, los que a continuación se transcriben:-

(SIC) “PRIMERO.- *La sentencia apelada viola lo dispuesto en los artículos 113, 530 y 531 del Código de Procedimientos Civiles del Estado y articulo 1134 del Código Civil de Tamaulipas. De la sentencia apelada se desprende que el A quo declaró improcedente la acción de mi poderdante toda vez que no le concede el valor probatorio a la documental privada consistente a la consulta realizada al sistema de administración de cartera, certificada por el LICENCIADO ******, gerente del área jurídica de la Delegación Regional de Tamaulipas del *****

*****, porque señalo que dicha documental se encuentra contradictoria con lo pactado en el contrato de otorgamiento de crédito toda vez que en el contrato base se otorgó a la parte demandada un crédito por la cantidad de 156.2832 veces salario mínimo mensual vigente en el Distrito Federal, y en la certificación de adeudos al día 31 de julio del año 2017 adeuda por concepto de capital 175.5870; dentro los hechos que se narran dentro de la demanda en especial dentro del hecho marcado con el numeral 11), la documental en comento y exhibida en autos demuestra el incumplimiento que la parte demandada ha tenido para el pago de las mensualidades del crédito otorgado, incumpliendo con lo establecido en el contrato de

*crédito, específicamente en lo estipulado en las LAS CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN DEL *****, publicadas el 24 de Abril de 2008 en el Diario Oficial de la Federación, concretamente en el CAPITULO III denominado “CONDICIONES GENERALES DE CONTRATACIÓN DEL CRÉDITO”, en su APARTADO A, CLAUSULA VIGÉSIMA PRIMERA, inciso C) misma que deben tenerse como parte integral del CONTRATO DE APERTURA DE CRÉDITO SIMPLE Y DE LA CONSTITUCIÓN DE HIPOTECA, ya que así fue establecido en el citado contrato en donde **mi representada y la parte demandada convinieron que además de los supuestos en que la ley así lo ordene, que el ***** podrá dar por vencido de manera anticipada el plazo para el pago total del crédito otorgado y sus accesorios legales aún sin necesidad de notificación o aviso previo al acreditado, ni de declaración judicial previa si ocurría en que inciso C) El TRABAJADOR no realice puntual e íntegramente, por causas imputables a él 2 (dos) pagos consecutivos o 3 (tres) no consecutivos en el curso de 1 (uno) año de las amortizaciones mensuales del saldo de capital y de los demás adeudos que tuviere, salvo en el caso que le hubiese sido otorgada la prórroga prevista en este contrato. Sin perjuicio de los antes estipulado, el ***** podrá asimismo requerir al TRABAJADOR el***

pago de las amortizaciones mensuales omisas mas intereses moratorios en los términos convenidos en el contrato, así como los gastos de cobranza que causaren. Por lo cual el certificado de adeudos exhibido en autos se aprecia que la parte demandada no ha realizado aportaciones a las que se obligó con mi mandante, actualizándose así la causal de vencimiento anticipado descrita en mi escrito inicial de demanda fundatorio y por lo cual debió dársele valor probatorio, mismas que la parte demandada no objeto en ningún momento. por otra parte, de las constancias de requerimiento de pago hechas a la parte demandada las cuales se exhiben en el escrito inicial de demanda, tampoco le concede valor probatorio ya que a su criterio no reúne los requisitos formales para darles pleno alcance y valor probatorio, siendo lo anterior totalmente infundado y contraviniendo lo dispuesto en los artículos de la ley adjetiva civil del estado de Tamaulipas, citados anteriormente. Aduciendo el Juez de Primera Instancia que toda vez que el objeto principal del asunto es obtener el pago de una cantidad específica, como lo pide la actora en la prestación identificada como Inciso B), por concepto de suerte principal, por lo que dice el resolutor primigenio que es **obligación de la parte actora JUSTIFICAR de manera fehaciente el cuántum del adeudo requerido**, argumentando que la parte actora no allegó ninguna prueba que justifique la cantidad

reclamada. Ahora bien, contrario a lo estimado por el A quo, no se debió de haber declarado improcedente la acción, con motivo de que la cantidad reclamada en el inciso B) toda vez que tal cantidad solicitada NO CONSTITUYE UN ELEMENTO DE LA ACCIÓN HIPOTECARIA EJERCITADA. Tal como se desprende de los numerales 530 y 531 de la ley adjetiva civil, además siendo que lo que se reclamó precisamente fue la cantidad otorgada del crédito, en el documento base de mi acción y no el monto que se desprende del certificado de adeudos, como equivocadamente argumenta el a quo, puesto que de las prestaciones reclamadas no se hace mención del monto capital mencionado en el certificado de adeudos exhibido, ya que dicho certificado de adeudos se exhibe para demostrar que el demandado no ha realizado las aportaciones a las que se obligó con mi mandante, mas no se obtuvo de dicho certificado la cantidad que como suerte principal se reclama en mi escrito de demanda, sino que se toma el monto de la prestación reclamada la que se menciona en el documento base de mi acción, realizando las operaciones aritméticas correspondiente para la obtención de cantidad liquida que se reclama en el escrito inicial de demanda, lo cual obra en autos, siendo incongruente lo argumentado por el Juzgador, e infundada su resolución al no condenar al demanda a las prestaciones que se le reclaman

y a la cual tiene derecho mi poderdante, causando así agravios y perjuicios a mi representada, con la resolución infundada que dicta el a quo. En efecto, de acuerdo con los artículos 530 y 531 del Código de Procedimientos Civiles del Estado, en las demandas que tengan por objeto exigir el pago o la prelación de un crédito garantizado con hipoteca, se requiere acreditar los siguientes elementos: **I.-** Que el crédito conste en escritura pública la cual deberá estar debidamente registrada; y, **II.-** Que sea de plazo cumplido; o que deba anticiparse conforme al contrato de hipoteca, o a la ley.”. Para contextualizar se transcriben los preceptos invocados: **“ARTÍCULO 530.-** Se tramitarán en juicio hipotecario las demandas que tengan por objeto exigir el pago o la prelación de un crédito garantizado con hipoteca. **ARTÍCULO 531.-** Para que proceda el juicio hipotecario, deberán reunirse los siguientes requisitos: **I.-** Que el crédito conste en escritura pública la cual deberá estar debidamente registrada; y, **II.-** Que sea de plazo cumplido; o que deba anticiparse conforme al contrato de hipoteca, o a la ley.”.- Atento a lo anterior, se tramitarán en juicio hipotecario las demandas que tengan por objeto exigir el pago o la prelación de un crédito garantizado con hipoteca, **para lo cual se necesita que el crédito conste en escritura pública que se encuentre registrada y, que sea de plazo**

cumplido o que deba anticiparse conforme al contrato de hipoteca, o a la ley. Ahora bien, como se desprende de las constancias de los autos del juicio de primera instancia, mi representada exhibió con el escrito inicial de demanda la escritura pública debidamente registrada y que debe anticiparse conforme al contrato de hipoteca, **AL HABERSE PACTADO EL VENCIMIENTO ANTICIPADO EN EL CONTRATO BASE**, y toda vez que la parte demandada incurrió en la correspondiente causal de vencimiento anticipado al haber omitido el cumplimiento de los pagos a que se obligó; todo lo anterior como lo tuvo por acreditado el A quo en la Sentencia Definitiva apelada. Luego entonces, mi representada cumplió con los requisitos necesarios para el ejercicio de la acción, sin que la cantidad reclamada en el inciso c) constituya un elemento de dicha acción, como lo estima el A quo, toda vez que opuesto a lo considerado por dicho resolutor, **NO ES UN ELEMENTO DE LA ACCIÓN EL ACREDITAMIENTO DEL MONTO DE LO DEMANDADO, SINO QUE ES UNA CUESTIÓN QUE SOLAMENTE INCIDE EN EL QUÁNTUM DE LA CONDENA, SIN EMBARGO CONTRARIO A LO ESTIMADO POR EL JUZGADOR NO TIENE COMO EFECTO ABSOLVER AL DEMANDADO**, al haber quedado debidamente demostrado en el juicio que nos ocupa el incumplimiento en que incurrió la parte

demandada, actualizándose así la causal de vencimiento anticipado pactada en el contrato base. En efecto, tal y como se desprende de las pruebas rendidas en el juicio, así como de la sentencia apelada, la parte demandada no acreditó encontrarse al corriente en el pago del crédito, ya que no rindió ninguna prueba con la que demostrara haber cubierto las mensualidades del crédito señaladas en el escrito inicial de demanda como omisas. Por lo que el A quo tuvo por acreditada la causal de vencimiento anticipado pactada en la Cláusula Novena del contrato base. En síntesis, es improcedente y contraviene el principio de congruencia, que el A quo haya dejado de condenar a la parte demandada a las prestaciones reclamadas, no obstante de que tuvo por cierto y acreditado el incumplimiento (mora) en que incurrió la parte demandada, y toda vez que el artículo 273 del Código de Procedimientos Civiles, dispone que el actor debe probar los hechos constitutivos de su acción y el reo los de sus excepciones, siendo que en el caso concreto **la parte actora acreditó el hecho constitutivo de la acción, consistente en el incumplimiento de pago de la parte demandada,** sin que la parte demandada demostrara lo contrario, es decir, el cumplimiento de la oblación, Y TODA VEZ QUE COMO SE HA VISTO, **LA CANTIDAD** QUE SE RECLAMA NO CONSTITUYE UN ELEMENTO

*DE LA ACCIÓN. Por lo tanto, es improcedente que el A quo no obstante de que haber tenido por acreditado el incumplimiento (mora) en que incurrió la parte demandada, lo haya absuelto de las prestaciones reclamadas, lo cual contraviene los principios de congruencia interna y externa que deben observar las resoluciones judiciales, en términos del artículo 113 del Código Procesal Civil de la Entidad; solamente porque estimó que no fue acreditada la cantidad reclamada en el inciso c) de las prestaciones de la demanda, ya que como se ha visto, dicho aspecto no es un elemento o requisito de la acción, por lo tanto es insuficiente para que el Juez declare improcedente la acción.- Sirve de sustento los siguientes criterios.- “Época: Novena Época Registro: 200482 Instancia: Primera Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo I, Mayo de 1995 Materia(s): Civil Tesis: 1a./J. 1/95 Página: 95 **ESTADO DE CUENTA CERTIFICADO POR CONTADOR. NO ES EXIGIBLE SU PRESENTACION EN JUICIO HIPOTECARIO PARA LA PROCEDENCIA DE ESTE.** Si bien la Ley de Instituciones de Crédito otorga el carácter de título ejecutivo al certificado contable cuando se exhiba junto con el contrato de crédito en que conste la obligación, y también el de prueba plena para acreditar en los juicios respectivos los saldos resultantes a cargo de los acreditados; de ahí no se sigue que la certificación contable sea*

exigible en toda clase de juicios, y especialmente en los hipotecarios, toda vez que aun cuando éstos participan, de la naturaleza privilegiada del ejecutivo, y también exigen la exhibición de un título ejecutivo para su procedencia, no cualquier título ejecutivo puede servirles de base, sino sólo el documento que la ley respectiva señale, como lo es la escritura pública que contenga el crédito hipotecario, debidamente registrada, ello sin perjuicio del derecho del acreedor para exhibir dicho estado de cuenta certificado, cuando quiera demostrar el saldo resultante. Por ende, la presentación del certificado contable, junto con el contrato, sólo es indispensable en los demás juicios ejecutivos, dado que los mismos se fundan necesariamente en documentos que tengan aparejada ejecución. Contradicción de tesis 23/94. Entre las sustentadas por el Primer y Segundo Tribunales Colegiados del Décimo Noveno Circuito. 10 de marzo de 1995. Cinco votos. Ponente: Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Marco Antonio Rodríguez Barajas. Tesis de Jurisprudencia 1/95. Aprobada por la Primera Sala de este alto Tribunal, en sesión pública de diez de marzo de mil novecientos noventa y cinco, por cinco votos de los señores Ministros: Presidente Juventino V. Castro y Castro, Humberto Román Palacios, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga María del Carmen Sánchez Cordero de García Villegas.

Nota: Esta tesis No. 1/95 se editó en el Semanario Judicial de la Federación correspondiente al mes de abril, Tomo I, página 5, a petición de la Sala, se vuelve a publicar con las correcciones que envía ésta. Época: Novena Época Registro: 163101 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXIII, Enero de 2011 Materia(s): Civil Tesis: XXI.2o.C.T.30 C Página: 3215. JUICIO ESPECIAL HIPOTECARIO. EL ESTADO DE ADEUDO CERTIFICADO NO CONSTITUYE UN ELEMENTO DE LA ACCIÓN, SINO UN MEDIO DE CONVICCIÓN PARA ACREDITARLA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO). Doctrinalmente, los elementos de la acción son los sujetos, la causa y el objeto. Los sujetos son el actor y el demandado; la causa, el derecho que aduce tener el actor y la presunta violación a ese derecho. Finalmente, el objeto es lo que se pide en la demanda, por ejemplo, la condena al pago de una cantidad, la rescisión de un contrato, etcétera. Los presupuestos procesales son los supuestos sin los cuales no puede iniciarse ni desenvolverse válidamente un proceso (competencia, capacidad, personalidad, personería, etcétera). Las condiciones de la acción son necesarias para que el actor obtenga una sentencia favorable. Existen presupuestos generales a todo juicio (demanda, competencia y capacidad procesal) y presupuestos especiales

(un título ejecutivo en los juicios ejecutivos mercantiles, un título hipotecario en los hipotecarios, un testamento en los juicios testamentarios y el acta de matrimonio en los divorcios). De acuerdo con lo anterior, el estado de adeudo certificado no constituye un elemento de la acción, sino un medio de convicción para probar el segundo requisito de procedencia de la acción hipotecaria -consistente en el incumplimiento del contrato- previsto en la fracción II del artículo 604 del Código Procesal Civil del Estado de Guerrero, por ende, la eficacia de esta documental es una cuestión que debe ponderarse conforme a las reglas de la valoración de pruebas, y no como un elemento de la acción.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS CIVIL Y DE TRABAJO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 194/2010. Jorge Vázquez Martínez. 11 de noviembre de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Francisco García Sandoval. Secretario: Ismael Hinojosa Cuevas.

“Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIX, Mayo de 2004 Tesis: I.13o.T.82 L Página: 1784 *****.

EL ESTADO DE CUENTA DEL FONDO DE AHORRO DEL DERECHOHABIENTE, CERTIFICADO POR EL GERENTE DE SERVICIOS LEGALES DEL INSTITUTO, ES IDÓNEO PARA ACREDITAR LAS

consistente en certificar documentos en los que consten los actos y operaciones para su remisión a las autoridades, lo cual conduce a concluir que el estado de cuenta del fondo de ahorro certificado, es el documento oficial de control e información utilizado para la determinación del monto de las aportaciones correspondientes al derechohabiente, reflejado en los registros que obran en el

*****

*****; por tanto, los datos que contenga este documento son idóneos para acreditar los extremos referidos, sin que sea necesario que se exhiba otro tipo de constancias, dado que es precisamente el estado de cuenta del fondo de ahorro el documento en el que se asientan los datos correspondientes. Además, dada la trascendencia fiscal que pudiera derivarse de la información en él contenida, sería difícil que los datos ahí registrados fueran alterados, lo que, desde luego, no impide la posibilidad de que el trabajador pueda desvirtuarlos con prueba en contrario. DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 3873/2004. Gabriel Domínguez Pérez. 18 de marzo de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel Hernández Saldaña. Secretaria: Margarita Jiménez Jiménez. Amparo directo 4013/2004. Francisco Hernández Juárez. 18 de marzo de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Héctor

Landa Razo. Secretario: Juan de Dios González-Pliego Ameneiro.”.- “Novena Época Registro: 181982 Instancia: Primera Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIX, Marzo de 2004 Materia(s): Civil Tesis: 1a./J. 63/2003 Página: 11

DEMANDA. LA OBLIGACIÓN DE EXPRESAR LOS HECHOS FUNDATORIOS DE LA ACCIÓN, SE CUMPLE CUANDO EL ACTOR HACE REMISIÓN EXPRESA Y DETALLADA A SITUACIONES, DATOS O A LOS CONTENIDOS EN LOS DOCUMENTOS ANEXOS A ELLA (LEGISLACIÓN DE LOS ESTADOS DE SONORA Y PUEBLA). Si bien es cierto que los artículos 227, fracción VI, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Sonora y 229, fracción V, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado Libre y Soberano del Estado de Puebla, de aplicación supletoria a los juicios mercantiles, establecen el imperativo de que en la demanda se expresen con claridad y precisión los hechos en que se sustente la acción que se ejercite, también lo es que tal obligación se cumple cuando el actor hace remisión expresa y detallada a situaciones, datos o hechos contenidos en los documentos exhibidos junto con la demanda, aun cuando éstos constituyan base de la acción, pues con esa remisión, aunada al traslado que se le corre con la copia de ellos, la parte demandada tendrá conocimiento de esos hechos para así preparar

su defensa y aportar las pruebas adecuadas para desvirtuarlos. Contradicción de tesis 26/2002-PS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Quinto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito. 12 de noviembre de 2003. Mayoría de 3 votos. Disidente: Juventino V. Castro y Castro. Ausente: Humberto Román Palacios. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: Heriberto Pérez Reyes. Tesis de jurisprudencia 63/2003. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de doce de noviembre de dos mil tres.”.- **Registro No. 183061 Localización:** Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XVIII, Octubre de 2003 Página: 789 Tesis: V.1o. J/25 Jurisprudencia Materia(s): **Civil ESTADO DE CUENTA CERTIFICADO EXHIBIDO CON EL ESCRITO INICIAL DE DEMANDA. FORMA PARTE INTEGRANTE DE ÉSTA.** Si la institución de crédito actora de un juicio civil o mercantil, en su escrito inicial de demanda, en la parte en que narra los hechos constitutivos de la misma, se remite al estado de cuenta certificado por el contador autorizado de la misma institución, debe estimarse que tal instrumental forma parte integrante de la demanda. Además, es correcto que el juzgador estime que la demanda y el estado de cuenta certificado se encuentran

vinculados entre sí, ya que este último contiene el desglose pormenorizado de los movimientos del crédito otorgado al demandado. PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO. Amparo directo 85/2001. Banco Inverlat, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Inverlat. 27 de septiembre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Mario Pedroza Carbajal. Secretario: Froylán Muñoz Alvarado. Amparo directo 295/2001. Elizabeth Ochoa Félix de Dick. 13 de noviembre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Carmen Alicia Bustos Carrillo, secretaria de tribunal en funciones de Magistrada en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Secretario: Juan Manuel Córdova Córdova. Amparo directo 170/2002. José Ricardo Careaga Melendrez y otra. 3 de junio de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Evaristo Coria Martínez. Secretario: Rolando Fimbres Molina. Amparo directo 119/2003. Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex, S.A. de C.V. 6 de mayo de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Mario Pedroza Carbajal. Secretario: Froylán Muñoz Alvarado. Amparo directo 957/2002. Banco Nacional de México, S.A., Integrante del Grupo Financiero Banamex, S.A de C.V. 23 de junio de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Evaristo Coria Martínez. Secretaria: María Dolores Salazar Quijada.”.- En

cuanto al requerimiento de pago exhibidos por mi mandante y de los cuales el a quo no les da valor probatorio por no contener los requisitos formales que a su criterio desestima. En este contexto, **si bien el requerimiento de pago efectuado por la parte actora a la demandada, que se hizo constar en el acta circunstanciada y el acta de requerimiento de pago que obran en autos, no contienen las formalidades establecidas que requiere su Señoría, sin embargo, ello no es inconveniente para que no se le otorgara valor probatorio a dichos documentos, ya que dicha interrelación es de tipo extrajudicial, conforme al artículo 1134 del Código sustantivo en vigor, no así de acuerdo con el Código Adjetivo o de Procedimientos Civiles, en donde únicamente se regulan las actuaciones a notificaciones de carácter Judicial (procesales).** Como se ha visto, el precepto de donde se deriva la necesidad de la interrelación (1134 Código Civil), no establece los requisitos que debe colmar la interrelación de carácter extrajudicial, sino únicamente que puede ser llevada a cabo ante Notario o dos testigos, siendo conforme a esta última manera como se realizó el requerimiento de pago, señalado en los hechos de la demanda por la parte actora y que se desprende de las documentales que desestimo el A quo (carta de requerimiento y acta circunstanciada). las formalidades

aplicables están en el código civil, concretamente en su artículo 1134, el cual expresa lo siguiente: **ARTÍCULO 1134.-** Si no se ha fijado el tiempo en que deba hacerse el pago y se trata de obligaciones de dar, no podrá el acreedor exigirlo sino después de los treinta días siguientes a la interpelación que se haga, **ya judicialmente, ya en lo extrajudicial, ante un Notario o ante dos testigos.** Tratándose de obligaciones de hacer, el pago debe efectuarse cuando lo exija el acreedor, siempre que haya transcurrido el tiempo necesario para el cumplimiento de la obligación. En efecto, mi mandante le requirió el pago de lo adeudado a la parte demandada previo a acudir a un juicio, de buena fe lo hizo, para lo cual interpele a la parte demandada de manera extrajudicial, y ante dos testigos, **tal como lo permite el precepto legal citado, el cual no observó el juez de primera instancia, siendo esta la esencia de este segundo agravio, pues no se requiere en dicho precepto que los testigos ratifiquen tal circunstancia ante la autoridad judicial ya que el requerimiento fue hecho de manera extrajudicial, el A quo omite analizar en la sentencia recurrida, que dichas documentales no fueron objetadas, por lo que tienen pleno alcance y valor probatorio, AL NO HABER SIDO DESVIRTUADO SU CONTENIDO POR LA PARTE DEMANDADA.** Aunado el requerimiento que nos ocupa si es

eficaz, pues esta hecho de manera extrajudicial y ante dos testigos y ha cumplido su función que es informar al deudor la obligación que tiene, tal y como se observa con el siguiente criterio:

*Época: Novena Época Registro: 163796
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Tesis Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXXII, Septiembre de 2010 Materia(s): Civil Tesis: I.3o.C.839 C Página: 1274*

INTERPELACIÓN. SU FINALIDAD QUEDA SATISFECHA CUANDO EXISTE CERTEZA JURÍDICA DE QUE EL DEUDOR RECIBIÓ DE SU ACREEDOR UNA CARTA QUE PRECISA LA OBLIGACIÓN QUE DEBE CUMPLIR. El artículo 2080 del Código Civil para el Distrito Federal establece como requisitos de la interpelación extrajudicial, la presencia de dos testigos o que se realice ante notario público; la finalidad de estos requisitos es otorgar certeza y seguridad jurídica, de que el acreedor requirió el cumplimiento de la obligación a su deudor, y que éste tuvo conocimiento de la voluntad de su acreedor de exigir el cumplimiento de su obligación o sea, que fue requerido de pago, y que a partir de esa fecha tenía treinta días para hacer el pago y no incurrir en mora. Por tanto, una carta dirigida al deudor, satisface el requerimiento de la interpelación porque contiene una solicitud de pago del adeudo, el cual se acredita con la firma de dicha carta por el

acreedor y que la misma haya tenido contestación por el deudor, satisfaciendo de este modo la certeza y seguridad jurídica de la existencia y requerimiento de la obligación. *TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Amparo directo 428/2010. Asunción Gutiérrez Nieto, su sucesión. 27 de agosto de 2010. Unanimidad de votos. Ponente: Neófito López Ramos. Secretario: Mariano Suárez Reyes. 1012611.13. Primera Sala. Novena Época. Apéndice 1917-Septiembre 2011. Tomo V. Civil Primera Parte – SCJN Primera Sección – Civil Subsección I – Sustantivo, Pág. 17. **ACCIÓN RESCISORIA DE CONTRATO. LA MORA O INCUMPLIMIENTO DEL DEUDOR, ES UN REQUISITO PARA SU PROCEDENCIA Y SU ACREDITAMIENTO DEBE SER ESTIMADO DE OFICIO POR EL JUZGADOR.** En términos de lo dispuesto en los artículos 376 del Código de Comercio, y 1778 y 2154 del Código Civil del Estado de México, referidos a contratos de compraventa, para que el contratante-acreedor esté en posibilidad de demandar ante el órgano jurisdiccional la rescisión de contrato, debe acreditar ante éste, además de haber cumplido con su obligación, el hecho de que el contratante-deudor ha incumplido con la suya y, por tanto, incurrido en mora. Ahora bien, tratándose de contratos de compraventa en los que no se haya designado lugar de pago, operará conforme a lo previsto en*

los artículos 2082 del Código Civil Federal, aplicado supletoriamente en materia mercantil y 1911 del Código Civil para el Estado de México, la regla general que establece que el pago debe hacerse en el domicilio del deudor; en consecuencia, para que el deudor se constituya en mora, debe ser requerido en su domicilio por el acreedor, hecho este último que, por constituir una condición o requisito para la procedencia de la acción rescisoria de contrato, debe acreditarse ante el juzgador y éste la debe estimar, aun de oficio, por ser de orden público el cumplimiento de los requisitos de la acción, con independencia de que haya o no alegación de la parte demandada en vía de excepción. Contradicción de tesis 66/99. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Segundo Circuito (actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito). 14 de febrero de 2001. Cinco votos. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Francisco Javier Solís López. Tesis de jurisprudencia 46/2001. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de cuatro de julio de dos mil uno, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: presidente José de Jesús Gudiño Pelayo, Juventino V. Castro y Castro, Humberto Román Palacios, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas.

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, Noviembre de 2001, Página: 6, Primera Sala, Tesis: 1a./J. 46/2001; véase ejecutoria en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XIV, diciembre de 2001, página 408. “Época: Novena Época Registro: 188411 Instancia: Primera Sala Jurisprudencia Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XIV, Noviembre de 2001 Materia(s): Civil Tesis: 1a./J. 86/2001 Página: 11

DOCUMENTOS PRIVADOS. PUEDEN PERFECCIONARSE, ENTRE OTROS MEDIOS, A TRAVÉS DE SU RECONOCIMIENTO EXPRESO O TÁCITO, TENIENDO EN AMBOS CASOS LA MISMA EFICACIA PROBATORIA PARA DEMOSTRAR LOS EXTREMOS PLANTEADOS (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). *Del contenido de los artículos 334, 335 y 338 al 344 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se desprende el carácter de pruebas imperfectas de los documentos privados, que pueden ser perfeccionados, entre otros medios, a través del reconocimiento expreso del autor del documento, o por medio de su reconocimiento tácito derivado de su no objeción, teniendo en ambos casos la misma eficacia probatoria para demostrar los extremos planteados. Ello es así, porque de conformidad con lo dispuesto en el citado artículo 335, los documentos privados presentados en juicio*

como prueba y no objetados por la parte contraria, surtirán sus efectos como si hubieran sido reconocidos expresamente, siendo correcto que se les otorgue un valor indiciario únicamente cuando no sean reconocidos, expresa o tácitamente, ni su autenticidad sea reforzada a través de algún otro medio probatorio de los establecidos en la ley, sin que ello atente contra el principio de valoración de las pruebas consagrado en el artículo 402 del mencionado código adjetivo, toda vez que este precepto únicamente obliga al juzgador a valorar en su conjunto los medios de prueba aportados y admitidos, atendiendo a las reglas de la lógica y de la experiencia, exponiendo los fundamentos de su valoración y de su decisión, por lo que, independientemente de que la prueba documental privada se haya perfeccionado a través de su reconocimiento expreso, de su reconocimiento tácito derivado de su no objeción, o de algún otro medio probatorio, se valorará en conjunto con las demás probanzas, atendiendo a las señaladas reglas, exponiendo el juzgador los fundamentos de su valoración y de su decisión. Contradicción de tesis 32/94. Entre las sustentadas por el Cuarto y Quinto Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito y por los Tribunales Colegiados Primero, Segundo y Tercero del Sexto Circuito (actualmente Primero, Segundo y Tercer Tribunales Colegiados en Materia Civil del Sexto

Circuito) y el Primer Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito (actualmente Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito). 13 de junio de 2001. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: María Elizabeth Acevedo Gaxiola. Tesis de jurisprudencia 86/2001. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de quince de agosto de dos mil uno, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: presidente en funciones Juventino V. Castro y Castro, Humberto Román Palacios, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo.”.- Continuando con el multicitado requerimiento de mi mandante, este queda satisfecho al momento de hacerlo ante dos testigos, y cumple con el supuesto requisito de procedibilidad, quedando ahora la carga de desvirtuar dicho requerimiento a la parte demandada, pues si bien es cierto, el juzgado esta obligado a revisar los requisitos de procedibilidad, no esta en condiciones de valorar lo que no ha argumentado la contraria, pues con su proceder esta vulnerando también los artículos 1° y 7° del Código de procedimientos Civiles de Tamaulipas.- Ahora bien, no podemos perder de vista, que la demandada fue emplazada a juicio, por tanto es a la demandada, a quien le corresponde la carga de la prueba para desacreditar en todo caso el requerimiento

que se le hizo, lo cual en la especie no ocurrió, pues aun y cuando se le llamó a juicio conforme a derecho, no compareció a deducir sus derechos en tiempo y forma, por lo que el Juzgador, no puede pasar desapercibido la interpelación extrajudicial que es el requerimiento hecho por mi mandante a la parte demandada en el momento, lugar y tiempo oportuno tal como lo indica nuestra legislación procesal vigente.- En este orden de ideas, el Juez de Primera Instancia parece pasar desapercibido que el medio MÁS NATURAL por el que se perfeccionan las pruebas documentales, es la falta de objeción por la parte contraria; tratándose de un reconocimiento tácito, por lo que adquieren pleno alcance y valor probatorio, al tener el mismo valor que el reconocimiento expreso.” (SIC).- -----

----- La demandada no compareció ante esta Sala a dar contestación a los agravios anteriores; y,- -----

----- **TERCERO.-** Se procede al estudio de los conceptos de agravio propuestos por la apelante licenciada ***** en su carácter de apoderada legal de la parte actora

*****
*****
*****, los que se analizan conforme a las consideraciones y los razonamientos jurídicos que enseguida se precisan.- -----

----- La recurrente al impugnar la sentencia expuso como agravio lo siguiente:- -----

----- 1.1.- Que se transgrede en perjuicio del *****

**, lo establecido en los artículos 113, 273, 530 y 531 del Código de Procedimientos Civiles, y el diverso 1134 del Código Civil.- -----

----- 1.2.- Que el Juzgador no concedió valor probatorio a la documental privada consistente en la consulta realizada al sistema de administración de cartera, certificada por el gerente del área jurídica de la Delegación Regional de Tamaulipas, del *****.- --

----- 1.3.- Agregó que dicha documental, es decir el certificado de adeudos, demuestra el incumplimiento por parte de la demandada ya que de ahí se aprecia que no ha pagado las aportaciones mensuales a las que se obligó, y con ello se actualiza la causal de vencimiento anticipado, lo cual no fue objetado por la parte demandada;- -----

----- 1.4.- Que cumplió con los requisitos señalados para la procedencia del juicio hipotecario previstos en los artículos 530 y 531 del Código de Procedimientos Civiles; y,- -----

----- 1.5.- Concluyó exponiendo que no se debió declarar improcedente la acción porque el acreditamiento de la suerte principal no constituye un elemento de la acción hipotecaria sino una cuestión que solo incide en el quántum de la condena que no tiene como efecto absolver a la demandada, pues lo reclamado fue la cantidad otorgada en el crédito y no el monto que se desprende del certificado de adeudos, como equivocadamente argumenta el Juzgador.- -----

----- 2.1.- Por otra parte, se inconforma porque no se le otorgó valor probatorio a la carta de requerimiento de pago y al acta circunstanciada, no obstante [dice] que la interpelación extrajudicial no se tiene que llevar a cabo conforme a las reglas de las notificaciones judiciales puesto que dichas documentales fueron realizadas ante dos testigos y, que además éstas no fueron objetadas por la demandada.- -----

----- El primero de los planteamientos resulta **infundado**, y el segundo **fundado pero inoperante**.- --

----- Lo infundado del primer agravio es, porque el Juez de origen sí se pronunció sobre el valor probatorio de la consulta realizada al sistema de administración de cartera, y en efecto dicha documental privada, aún certificada por el gerente del área jurídica de la

Delegación Regional del ***** , no justifica la suma requerida como suerte principal, pues de dicha probanza se advierte discrepancia entre el monto otorgado en el contrato y el saldo que refleja el estado de cuenta.- -----

----- Es así, porque con la escritura pública número 5,130 (CINCO MIL CIENTO TREINTA) se acredita que el 6 seis de junio de 2008 dos mil ocho, el Instituto inconforme, llevó a cabo con la demandada ***** un contrato de otorgamiento de crédito con constitución de garantía hipotecaria, en el que desde su firma se constituyó hipoteca a favor del ***** sobre la vivienda (inmueble ubicado en la calle *****
*****
***** , Tamaulipas), para garantizar el crédito que el trabajador reconoció adeudar, siendo éste el equivalente a **156.2832** (ciento cincuenta y seis punto dos mil ochocientos treinta y dos) veces el salario mínimo mensual vigente en el Distrito Federal [fojas de la 21 a la 25].-

----- Sin embargo, de la consulta realizada al sistema de administración de cartera correspondiente a la derechohabiente ***** ***** ***** en la cual se certifica

que los adeudos coinciden fielmente con los registros que obran en el ***** (certificación de adeudos emitida el 22 veintidós de agosto de 2017 dos mil diecisiete); se advierte que al 31 treinta y uno de julio de 2017 dos mil diecisiete existe un cargo por concepto de capital por **175.5870** (ciento setenta y cinco punto cinco mil ochocientos setenta) veces salario mínimo mensual equivalente en pesos a la cantidad de \$402,954.60 (cuatrocientos dos mil novecientos cincuenta y cuatro 60/100 moneda nacional), y por concepto de intereses 35.9150 (treinta y cinco punto nueve mil ciento cincuenta) veces salario mínimo equivalente en pesos a la cantidad de \$82,421.33 (ochenta y dos mil cuatrocientos veintiuno 33/100 moneda nacional).- -----

----- De lo que sumando el capital mas intereses resulta un total de 211.5020 (doscientos once punto cinco mil veinte) veces salario mínimo equivalente en pesos a la cantidad de \$485,375.93 (cuatrocientos ochenta y cinco mil trescientos setenta y cinco 93/100 moneda nacional).- -----

----- Pero como saldo final del período en el certificado de adeudos se observa un total de 211.7120 (doscientos once punto siete mil ciento veinte) veces

salario mínimo equivalente en pesos a la cantidad de \$485,857.85 (cuatrocientos ochenta y cinco mil ochocientos cincuenta y siete 85/100 moneda nacional) [fojas de la 40 a la 46].- -----

----- No obstante que en la cláusula décima primera de las Condiciones Generales de Contratación, se estipuló que el saldo insoluto del crédito se incrementará en la misma proporción en que aumente el salario mínimo general diario, pero de ninguna manera se estableció como adeudo el acrecentamiento en la suma de salarios mínimos [fojas de la 28 a la 32].- -----

----- Para evidenciar lo anterior cabe destacar que los artículos 530 y 531 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tamaulipas, disponen:- -----

“ARTÍCULO 530.- Se tramitarán en juicio hipotecario las demandas que tengan por objeto exigir el pago o la prelación de un crédito garantizado con hipoteca.

ARTÍCULO 531.- Para que proceda el juicio hipotecario, deberán reunirse los siguientes requisitos:

I.- Que el crédito conste en escritura pública la cual deberá estar debidamente registrada; y,

II.- Que sea de plazo cumplido; o que deba anticiparse conforme al contrato de hipoteca, o a la ley.”

----- De la interpretación literal de los numerales transcritos se desprende, que cuando el juicio tiene por objeto el pago de un crédito hipotecario, la norma sólo exige como elementos constitutivos de la acción real hipotecaria, que el crédito que la hipoteca garantice, conste en escritura debidamente registrada, y que el plazo de pago se haya cumplido o que deba anticiparse.- -----

----- Tales elementos, como lo afirma la apelante, quedaron plenamente acreditados en el juicio, pues con el documento base de la acción se probó la existencia del crédito con garantía hipotecaria celebrado en escritura pública debidamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio; asimismo, al no haber probado la demandada que pagó las amortizaciones en los términos pactados, se acreditó la causa de vencimiento anticipado del plazo concedido en el crédito, consistente en la falta de pago de dos o más amortizaciones consecutivas o tres no consecutivas en el curso de un año.- -----

----- Sin embargo, cuando el objeto de la pretensión de la acreedora hipotecaria en la demanda es que se condene a la deudora al pago de la cantidad líquida que por concepto de adeudo del crédito les reclama, como en el caso aconteció; el demandante, en términos del artículo 273 del Código de Procedimientos Civiles, **debe probar que la acreditada adeuda la cantidad líquida que le reclama, no como un elemento de la acción real hipotecaria, sino por ser el objeto de la pretensión deducida en el juicio**, pues el efecto jurídico perseguido con el ejercicio de la acción es obtener una sentencia favorable en la que se condene a la demandada al pago de la cantidad líquida reclamada, y por ende, sí constituye un punto de la litis el pago de la cantidad líquida del capital adeudado que para la procedencia de la condena deba acreditarse de manera fehaciente dicho monto.- -----

----- En ese contexto, en atención a que la demanda y el estado de cuenta certificado deben encontrarse vinculados entre sí por contener éste último el desglose pormenorizado de los movimientos del crédito otorgado, es acertada la determinación del Juez de Primera Instancia al concluir que era improcedente la acción real hipotecaria porque la actora no aportó

prueba idónea para acreditar la cantidad líquida del crédito reclamado como suerte principal.- -----

----- Esto es así, con independencia de que *****
 ***** no dio contestación a la demanda ni objetó las pruebas por no haber comparecido a juicio y aún teniendo por ciertos los hechos salvo prueba en contrario; porque la presunción que deriva de la falta de contestación a la demanda, para constituir prueba plena deber ser administrada con otros medios de convicción que la favorezcan pues no puede reconocerse que por sí sola sea bastante para justificar la acción ejercitada ya que un indicio de esa naturaleza, originaría que se tuvieran por reconocidos presuntivamente los hechos aducidos no contestados.-

-----
 ----- Lo anterior con apoyo en los criterios jurisprudenciales cuyo rubro y texto a la letra dicen:- -----

“CONDENA. NO DEBE SER DECRETADA EN FORMA GENÉRICA Y RESERVADA SU DETERMINACIÓN PARA EJECUCIÓN DE SENTENCIA, CUANDO LA PRESTACIÓN RELATIVA FUE EL OBJETO PRINCIPAL DEL JUICIO Y SE DEMANDÓ EN CANTIDAD LÍQUIDA. De la interpretación sistemática de los artículos 3o., 70, 81, 322, fracciones III y V, 350 y 353 del Código Federal de Procedimientos

Civiles, se desprende que cuando el actor solicita el pago de cierta cantidad de dinero por virtud del incumplimiento de una obligación principal que no establece una suma determinada, está obligado a demostrar durante el procedimiento, en primer lugar, el hecho en que descansa su pretensión, y después, que tiene derecho a recibir ese preciso numerario, pues en este supuesto no basta que acredite la causa eficiente para que proceda la condena respectiva, sino a su vez, es menester que compruebe que le asiste derecho para exigir el pago de tal cantidad. En efecto, esos aspectos relevantes no pueden determinarse en ejecución de sentencia, ya que además de que la prestación de mérito es objeto principal del juicio, debe atenderse a los principios de preclusión y de litis cerrada que no permiten que el actor tenga una nueva oportunidad para acreditar la suma exacta que tenía derecho a demandar. En cambio, cuando se pretende el pago en dinero, sin especificar su monto, debido al incumplimiento de una obligación que no estipula una suma determinada, resulta procedente la condena genérica si el actor acredita la causa eficiente en la que descansa su petición, por lo que en ejecución de sentencia puede cuantificarse válidamente el numerario exacto, siempre que se den las bases para tal efecto; o en otro supuesto, cuando el actor demanda el pago en cantidad líquida porque la obligación

que se dice incumplida estipula tal suma, se requiere únicamente que acredite el hecho en que sustenta su pretensión para que el juzgador esté en aptitud de determinar la condena específica relativa.” (TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Novena Época. Registro: 170820, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, Diciembre de 2007, Tesis I.3.0.C. J/43, materia civil, pagina 1444.)- -----

“CONDENA. NO DEBE SER DECRETADA EN FORMA GENÉRICA Y RESERVADA SU DETERMINACIÓN PARA EJECUCIÓN DE SENTENCIA, CUANDO LA PRESTACIÓN RELATIVA FUE EL OBJETO PRINCIPAL DEL JUICIO Y SE DEMANDÓ EN CANTIDAD LÍQUIDA (MODIFICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA I.30.C.J/43). De la interpretación sistemática de los artículos 30, 70, 81, 322, fracciones III y V, 350 y 353 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se desprende que cuando el actor solicita el pago de cierta cantidad de dinero por virtud del incumplimiento de una obligación principal que no establece una suma determinada, está obligado a demostrar durante el procedimiento, en primer lugar, el derecho (término cualitativo) en que descansa su pretensión y, en segundo

término las pruebas de las que se aprecie la manera en que ese derecho se traduce de manera líquida en dinero (elemento cuantitativo), pues en este supuesto no basta que acredite la causa eficiente para que proceda la condena respectiva, sino a su vez, es menester que compruebe que le asiste derecho para exigir una cantidad en dinero. En efecto, esos aspectos relevantes no pueden determinarse en ejecución de sentencia, ya que además de que la prestación de mérito es objeto principal del juicio, debe atenderse a los principios de preclusión y de litis cerrada que no permiten que el actor tenga una nueva oportunidad para acreditar la manera en que su derecho se traducía en un monto líquido en dinero. En cambio, cuando se pretende el pago en dinero, sin especificar su monto, debido al incumplimiento de una obligación que no estipula una suma determinada, resulta procedente la condena genérica si el actor acredita la causa eficiente en la que descansa su petición, por lo que en ejecución de sentencia puede cuantificarse válidamente el monto en dinero en que se tradujo su pretensión, siempre que se den las bases para tal efecto; o en otro supuesto, cuando el actor demanda el pago en cantidad líquida porque la obligación que se dice incumplida estipula tal suma, se requiere únicamente que acredite el hecho en que sustenta su pretensión para que el juzgador esté

en aptitud de determinar la condena relativa.”

(TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO. Novena Época. Registro: 165309, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Febrero de 2010, Tesis I.3.0.C. 784 C. materia civil, pagina 2813.)- -----

----- Y la sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el apéndice del Semanario Judicial de la Federación de 2011, Novena Época, Registro: 1013608, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Jurisprudencia, Fuente: Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo V. Civil Segunda Parte - TCC Primera Sección - Civil Subsección 2 – Adjetivo, Materia(s): Civil, Tesis: 1009 Página: 1132, de rubro y texto siguientes:- -----

“CONDENA GENÉRICA O EN CANTIDAD LÍQUIDA, PARA DETERMINARLA EN RELACIÓN CON EL PAGO DE FRUTOS, INTERESES, DAÑOS O PERJUICIOS. EL JUZGADOR DEBE ATENDER A LA NATURALEZA PRINCIPAL O ACCESORIA DE LA PRETENSIÓN RELATIVA Y A LA FORMA EN QUE SE DEMANDE. *Sobre el particular pueden actualizarse y definirse jurídicamente las siguientes hipótesis: 1) cuando la pretensión de*

pago de frutos, intereses, daños o perjuicios, no es el objeto principal del juicio, pero en la demanda y durante el juicio se dan las bases para determinar la procedencia de la prestación, se impone decretar una condena genérica para que en el periodo de ejecución de sentencia se cuantifique el monto exacto, resultando irrelevante que se formule en cantidad líquida o no, en virtud del carácter de prestación accesoria; 2) cuando se pretende el pago de frutos, intereses, daños o perjuicios como objeto principal del juicio, sin especificar su monto en la demanda natural, dada la indeterminación cuantitativa de la obligación relativa, resulta procedente la condena genérica si el actor acredita la causa eficiente en la que descansa su petición, por lo que en ejecución de sentencia puede cuantificarse válidamente el numerario exacto, siempre que se proporcionen las bases para tal efecto, y 3) cuando el actor solicita el pago de frutos, intereses, daños o perjuicios como objeto principal del juicio y, además, la formula en cantidad líquida, está obligado a demostrar durante el procedimiento, en primer lugar, el hecho en que descansa su pretensión y, también, que tiene derecho a recibir ese preciso numerario, pues en este supuesto no basta que acredite la causa eficiente para que proceda la condena respectiva, sino que a su vez es menester que compruebe que le asiste derecho para exigir el pago de tal cantidad, por ende,

estos aspectos relevantes no pueden determinarse en ejecución de sentencia, porque además de que es la prestación principal en el juicio, debe atenderse a los principios de preclusión y de litis cerrada que no permiten que el actor tenga una nueva oportunidad para acreditar la suma exacta que tenía derecho a demandar, supuesto en el que no procede la condena genérica.”- -----

----- Por otra parte, se califica **fundado pero inoperante** el segundo agravio relativo a que el Juez de Primera Instancia no concedió valor probatorio a las documentales consistentes en la carta de requerimiento de pago y el acta circunstanciada debido a que el Juzgador consideró que éstas no acreditan que a la demandada se le haya requerido de manera extrajudicial el pago de las amortizaciones vencidas, por haber sido elaboradas dichas constancias de manera unilateral, en las cuales además no obra acuse de recibido por parte de la demandada ni se encuentra ratificado por las personas que presenciaron el acto.- --

----- Lo fundado es, porque, contrario a lo sostenido por el Juzgador, de acuerdo al artículo 66 del Código de Procedimientos Civiles, dicho precepto en efecto es aplicable a las notificaciones de carácter judicial necesarias dentro de un procedimiento, pero no a las

extrajudiciales las cuales se rigen por lo previsto en el diverso 1134 del Código Civil, que únicamente dispone como requisito para la interpelación extrajudicial que sea ante un Notario o ante dos testigos (como aquí acontece) y en este último supuesto sin más formalidades que cumplir, además que de las constancias que integran el expediente principal se advierte que la parte demandada omitió impugnar tales documentales debido a su incomparecencia a la primera instancia.- -----

----- Sin embargo, este motivo de disenso finalmente resulta **inoperante** al no desvirtuar las razones principales en que medularmente se apoya el fallo apelado, dado que el hecho de que el agravio se califica fundado, ésta sola circunstancia no es suficiente para dar fundamento a cada uno de los requisitos de la acción.- -----

----- Así, el Juez de de Primera Instancia de manera congruente declaró la improcedencia de la acción, por lo tanto no se transgrede lo establecido en los artículos 113, 273, 530 y 531 del Código de Procedimientos Civiles ni el diverso 1134 del Código Civil.- -----

----- Por las razones antes mencionadas, se puede concluir que en el caso concreto no resultan aplicables

los criterios citados como fundamento de los agravios que se examinan.- -----

----- Bajo las consideraciones que anteceden y de conformidad con lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 926 del Código de Procedimientos Civiles, al haber resultado **infundados** en una parte y **fundado pero inoperante** en otra, los motivos de agravio expuestos por la apelante, deberá **confirmarse** la sentencia impugnada.- -----

----- Respecto a la condena en el pago de costas procesales, no obstante que se ejerció una acción de condena y la sentencia le resultó adversa a la parte actora, conforme a lo dispuesto por el artículo 130 del Código de Procedimientos Civiles en armonía con el segundo supuesto del diverso 139 del ordenamiento legal invocado, considerando que la demandada no compareció a ninguna etapa del juicio habiendo sido declarada en rebeldía, ni acudió ante este Tribunal de Alzada a desahogar la vista de los agravios; resulta improcedente imponer condena en ese rubro por la tramitación de esta Segunda Instancia.- -----

----- Por lo anteriormente expuesto y fundado y con apoyo además en lo dispuesto por los artículos 105 fracción III, 109, 112, 113, 114, 115, 118, 926, 947

fracción VII, y 949 del Código de Procedimientos Civiles
y se:- -----

-----RESUELVE-----

----- **PRIMERO.-** Son **infundados** en una parte y **fundados pero inoperantes** en otra los motivos de agravio propuestos por la apelante en contra de la sentencia del 19 diecinueve de diciembre de 2017 dos mil diecisiete dictada por el Juez de Primera Instancia Civil del Séptimo Distrito Judicial del Estado con residencia en ciudad Mante, Tamaulipas, dentro del expediente 288/2017 relativo al Juicio Hipotecario promovido por el

*****
***** a través de su representante legal licenciada ***** en contra de *****
***** ***** , en consecuencia;-

----- **SEGUNDO.-** Se **confirma** la resolución impugnada que alude el punto resolutivo que antecede.- -----

----- **TERCERO.-** No se impone condena en el pago de costas de Segunda Instancia.- -----

----- **NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE;** y con testimonio de la resolución, devuélvanse los autos al

Lic. Liliana Raquel Peña Cárdenas
Secretaria de Acuerdos

----- Enseguida se publicó en lista del día.-Conste-----

La Licenciada MA VICTORIA GÓMEZ BALDERAS, Secretario Projectista, adscrito a la PRIMERA SALA COLEGIADA CIVIL, hago constar y certifico que este documento corresponde a una versión pública de la resolución número 86 (OCHENTA Y SEIS) dictada el miércoles 15 quince de marzo de 2018 dos mil dieciocho, constante de 50 cincuenta fojas útiles. Versión pública a la que de conformidad con lo previsto en los artículos 3 fracciones XVIII, XXII, y XXXVI; 102, 110 fracción III; 113, 115, 117, 120 y 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, y trigésimo octavo, de los Lineamientos generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como para la elaboración de versiones públicas; se suprimieron: el nombre de las partes, el de sus representantes legales, sus domicilios, y sus demás datos generales, información que se considera legalmente como confidencial y reservada por actualizarse lo señalado en los supuestos normativos en cita. Conste.

Documento en el que de conformidad con lo previsto en los artículos 3 fracciones XVIII, XXII, y XXXVI; 102, 110 fracción III; 113, 115, 117, 120 y 126 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tamaulipas, se suprimió la información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra en el ordenamiento mencionado.

Versión pública aprobada en Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia del Poder Judicial del Estado, celebrada el 13 de abril de 2018.